

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO

Florencia - Caquetá, quince (15) de diciembre del dos mil veinticinco (2025)

**PROCESO:** ACCIÓN DE TUTELA  
**ACCIONANTE:** ALEXANDER VARGAS  
**ACCIONADO:** UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS y REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
**RADICACIÓN:** 2025-00270-00  
**ASUNTO:** ADMITE ACCIÓN DE TUTELA

Por reparto, le correspondió a este Despacho judicial conocer de la acción de tutela promovida, por el señor **ALEXANDER VARGAS**, contra la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS y REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, ante la presunta vulneración a su derecho fundamental de petición, acceso a la información pública, debido proceso y defensa.

Analizado el escrito y observando que cumple con los requisitos señalados en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, se procederá a su admisión.

De igual manera, se advierte que el extremo activo solicitó el decreto de la **medida provisional** consistente en ordenar a la Unidad de Víctimas y Registraduría Nacional del Estado civil, aclarar porque demoraron en el envío de la certificación que lo acreditaba como víctima y calidad de indígena. Así mismo habilitar la página del CITREP para la inscripción de los aspirantes.

En lo que atañe a la posibilidad de adoptar medidas provisionales, el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991 establece que, en efecto, viable, desde la presentación de la acción de tutela, cuando el juez lo considere expresamente necesario y urgente para proteger un derecho, suspender la aplicación del acto concreto que la amenace o vulnere, así como también se le permite ordenar lo que estime procedente para amparar la garantía superior, evitando que se torne ilusorio el efecto de la eventual sentencia a favor del accionante o se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados.

Teniendo en mente los fines perseguidos por esa potestad otorgada al fallador constitucional, y considerando las circunstancias del caso concreto, no se evidencian razones suficientes para acceder a lo solicitado por el accionante, pues, aunque se reconoce la relevancia que tiene para Alexander Vargas la necesidad de obtener su certificación y poder inscribirse en la convocatoria CITREP, no se considera desproporcionado o irrazonable, en el contexto particular, que deba esperar la sentencia

que, eventualmente, debe emitirse en este asunto, teniendo en cuenta que la decisión debe ser tomada en un plazo máximo de diez (10) días, conforme a la naturaleza ágil, preferente y sumaria de este mecanismo. Además de que el Despacho debe valorar la contestación de las entidades accionadas, con el fin de determinar si en efecto existe o no una vulneración a la garantía constitucional invocada.

Lo anterior advirtiéndole, además, que, el actor en su escrito de tutela no indicó cual es la urgencia con la que requiere la citada información, además de que tampoco expuso razones concretas donde se evidencie que alguno de sus derechos fundamentales esté en una eminente amenaza, y que requiera de manera inmediata la intervención del Juez de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

En este contexto, refulge necesario indicar que, la medida que solicita el actor recae sobre las mismas pretensiones de la tutela, por ende, al no encontrarse configurada una causal para tomar medidas urgentes, se hace necesario ejercer un análisis exhaustivo de los elementos probatorios y de los argumentos de las partes involucradas, garantizando que la resolución sea integral y conforme a los principios de justicia y debido proceso que rigen esta herramienta constitucional.

Por último, cabe recordar que la Corte Constitucional, mediante del Auto 553 de 2021, sobre la debida integración del contradictorio en sede de tutela, anotó que el fallador de primera instancia tiene la obligación de notificar y vincular a las partes y a los terceros con interés legítimo en el resultado del proceso, como quiera que no es posible dictar sentencias inhibitorias en estos trámites.

Así las cosas, la Defensora de la Norma Superior, indicó que “(...) *aun cuando la parte accionante debe identificar a los responsables de las vulneraciones que invoca, el juez tiene el deber oficioso de integrar el contradictorio siempre que se percate que existe otro sujeto que, por su actividad, funciones o actos, ha debido ser vinculado.*”

En esa línea, y de acuerdo con lo esbozado en el escrito incoatorio deviene necesaria la vinculación al trámite del **CONGRESO DE LA REPÚBLICA y ASPIRANTES DE LA CONVOCATORIA CITREP** por considerarlo un tercero al que le puede asistir interés dentro del presente asunto.

Para ello se ordenará a la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** publicar en la pagina web de la convocatoria, y notificar a cada aspirante inscrito, el auto admisorio y escrito de la presente acción constitucional para que, si a bien lo tienen, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación, realicen el pronunciamiento que consideren necesario.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA - CAQUETÁ,**

**DISPONE**

**PRIMERO: ORDENAR** la apertura del trámite de la acción de tutela invocada por **ALEXANDER VARGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.117.503.461, contra la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y**

**UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, conforme a lo esgrimido en la parte motiva de este auto.

**SEGUNDO: VINCULAR CONGRESO DE LA REPÚBLICA y ASPIRANTES DE LA CONVOCATORIA CITREP** de acuerdo con los argumentos esbozados en el acápite considerativo de esta providencia.

**TERCERO: ORDENAR REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** publicar en la pagina web de la convocatoria, y notificar a cada aspirante inscrito, el auto admisorio y escrito de la presente acción constitucional para que, si a bien lo tienen, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación, realicen el pronunciamiento que consideren necesario.

**CUARTO: CONCEDER** a la accionada el término de dos (2) días para se pronuncie respecto a lo manifestado por el actor y ejerza el derecho a la defensa que le asiste, arribando las pruebas que considere pertinentes, conforme artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, so pena de tener por ciertos los hechos esbozados en el escrito constitucional, y entrar a resolver de plano (artículo 20 Decreto 2591 de 1991).

**QUINTO: NEGAR** la solicitud de medida provisional elevada por el extremo activo, conforme a las razones esbozadas.

**SEXTO:** Por medio del Centro de Servicios de los Juzgados Civiles y de Familia de esta ciudad, **NOTIFÍQUESE** a las partes por el medio más expedito.

**SEPTIMO: ADVERTIR** a la entidad accionada y al vinculado que el Juzgado recibe correspondencia al correo electrónico [jcivcf12@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jcivcf12@cendoj.ramajudicial.gov.co), por ello, las contestaciones y documentos que pretendan allegar al presente asunto constitucional, deberán ser remitidas a la dirección electrónica en mención.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

MGB

La Juez,

**ÁNGELA MARÍA MURCIA RAMOS**

Firmado Por:

**Angela Maria Murcia Ramos**

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 002

Florencia - Caqueta

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 10aa468dbd9b9f8d648497a066f61f34a2c140ce8bdda056238278fd9e926495

Documento generado en 15/12/2025 09:08:21 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**